

ACCIÓN URGENTE

TRES PERSONAS SE ENFRENTAN A LA EJECUCIÓN EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DE TRUMP

Dos hombres y una mujer declarados culpables en virtud de la ley federal estadounidense se enfrentan a la ejecución en las últimas semanas de la presidencia de Trump. Las autoridades federales estadounidenses reanudaron las ejecuciones después de 17 años, y han estado esforzándose por llevar a cabo una cantidad sin precedentes de inyecciones letales, revirtiendo las tendencias nacional y global hacia la abolición. Los casos de las personas seleccionadas para la ejecución se han visto afectados por la arbitrariedad, una asistencia letrada inadecuada y un sesgo racial; además, entre las personas seleccionadas hay algunas con graves discapacidades mentales e individuales, lo cual constituye una violación del derecho y las normas internacionales. Instamos al Fiscal General de los Estados Unidos a que detenga todas las ejecuciones.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

US Acting Attorney General Jeff Rosen

U. S. A. Department of Justice

950 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20530-0001

Línea para comentarios del DOJ: 202-353-1555.

Correo-e: askdoj@usdoj.gov

Señor Jeff Rosen, Fiscal General en funciones de los Estados Unidos

Le insto a cancelar todas las ejecuciones federales programadas y retirar la autorización para pedir la pena de muerte como opción de condena en los juicios en curso.

El esfuerzo de la administración Trump por llevar a cabo 13 ejecuciones no tiene precedentes, y va contra las tendencias tanto estadounidense como mundial de apartarse del uso de la pena de muerte. Si se llevan a cabo todas las ejecuciones programadas, en menos de siete meses su administración será responsable de más de la mitad de la cifra total de ejecuciones registrada en Estados Unidos en los últimos años.

El recurso a las ejecuciones desplegado en los últimos meses no sólo ha puesto de manifiesto los injustos defectos y la arbitrariedad que desde hace mucho tiempo afectan al sistema de pena capital de Estados Unidos, sino también la inacción por parte de su administración a la hora de respetar las salvaguardias y restricciones establecidas por el derecho y las normas internacionales para garantizar la protección de los derechos de quienes se enfrentan a la pena de muerte. El sesgo racial, las condenas a personas con graves discapacidades mentales e intelectuales y la inadecuada asistencia letrada son algunos de los factores comunes que han contribuido a una decisión judicial poco fiable sobre la vida o la muerte.

*A fecha de hoy, 22 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte, y otros 11 no han llevado a cabo ejecuciones desde hace más de 10 años. En lugar de intentar llevar a cabo ejecuciones, en sus últimas semanas en el cargo **le insto a que cancele inmediatamente todas las ejecuciones programadas.***

Atentamente,

[NOMBRE]

**AMNISTÍA
INTERNACIONAL**



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Dos hombres y una mujer se enfrentan a la ejecución en las últimas semanas de la presidencia de Trump: [Lisa Montgomery](#), el 12 de enero; [Corey Johnson](#) el 14 de enero, y [Dustin Higgs](#) el 15 de enero. Sus abogados han subrayado que los defectos y arbitrariedades que desde hace tanto tiempo afectan al uso de la pena capital en Estados Unidos están presentes también en sus casos (véanse enlaces a las declaraciones, en inglés). Desde que el pasado julio se reanudaron, después de 17 años, las ejecuciones federales en Estados Unidos, la administración Trump ha dado muerte a un total de ocho hombres y está tratando de llevar a cabo cinco ejecuciones en sus últimas semanas en el cargo, incluida la de la única mujer en el corredor de la muerte federal. Si se llevan a cabo todas las ejecuciones, la administración Trump habrá dado muerte a 13 personas en siete meses. Esta abrumadora cifra carece de precedentes, no sólo porque en total se registraron tres ejecuciones federales en los más de 40 años desde que se reanudaron los homicidios judiciales en Estados Unidos en 1977 hasta junio de 2020, sino también porque representa más de la mitad de la cifra total de ejecuciones registradas en Estados Unidos en los últimos años (22 en 2019; 25 en 2018). Por primera vez en más de 130 años, se han autorizado ejecuciones federales en Estados Unidos durante el periodo de transición presidencial.

La administración Trump se ha esforzado por llevar a cabo ejecuciones en contra de las restricciones internacionales al uso de la pena de muerte: establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Entre otros motivos de preocupación planteados por los equipos de defensa legal y [Amnistía Internacional](#), [Daniel Lewis Lee](#) fue ejecutado con 16 horas de retraso el 14 de julio sin que se notificara adecuadamente a sus abogados la reprogramación de la ejecución, y mientras había pendientes varias mociones judiciales sobre su caso. La muerte de [Wesley Ira Purkey](#) se certificó el 16 de julio, también 16 horas después del momento programado para su ejecución. Un tribunal federal de primera instancia había suspendido la ejecución, ya que el acusado había presentado pruebas sustanciales de que sufría Alzheimer y le habían diagnosticado trastorno de estrés post-traumático complejo, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave y psicosis, lo que le hacía no apto para ser ejecutado. El derecho internacional prohíbe el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental (psicosocial) o intelectual. Los abogados de [Dustin Honken](#) subrayaron que su juicio y su vista de determinación de la pena se habían visto afectados por la conducta indebida e inefectiva de sus abogados iniciales, que no habían informado al jurado de la discapacidad mental de su cliente y de su difícil historia. A pesar de ello, Dustin Honken fue ejecutado el 17 de julio. [Lezmond Mitchell](#), indígena navajo, fue ejecutado el 26 de agosto a pesar de la petición de suspensión realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alegó que se había violado el derecho del acusado a un juicio justo, y que la ejecución violaría asimismo el derecho a la identidad cultural de la nación navajo y socavaría el derecho a la libre determinación, ya que los navajos se oponen activamente a la aplicación de la pena de muerte a sus miembros. Los abogados de [Keith Dwayne Nelson](#) subrayaron, antes de su ejecución el 28 de agosto, que lo inefectivo de la asistencia letrada que su cliente había recibido durante el juicio había dado lugar a errores cruciales, y el jurado no tuvo conocimiento de factores atenuantes en el caso, incluidos los reiterados abusos sexuales y físicos que el acusado sufrió durante su traumática infancia. [William Emmett LeCroy](#), ejecutado el 22 de septiembre, había alegado que lo ineficaz de la asistencia letrada recibida durante el juicio había dado lugar a que no se presentaran adecuadamente ante el jurado pruebas y testimonios atenuantes sobre los abusos sexuales que LeCroy había sufrido durante su infancia y sobre su largo historial de discapacidad mental, pero los tribunales rechazaron las apelaciones. [Christopher Vialva](#) fue ejecutado el 24 de septiembre por un delito que se había cometido cuando acababa de cumplir 19 años, pese a que las investigaciones científicas han demostrado que el desarrollo del cerebro y la maduración psicológica y emocional de una persona continúan durante la veintena. Sus abogados habían expresado preocupación por lo inadecuado de la asistencia letrada que había recibido, que no había investigado las pruebas y testimonios sobre su traumática infancia y sus discapacidades mental e intelectual. [Orlando Hall](#), de raza negra, fue ejecutado el 19 de noviembre tras haber sido condenado a muerte en 1995 por un jurado compuesto exclusivamente por blancos después de que la fiscalía rechazara a cuatro de los cinco candidatos negros a miembros del jurado. La ejecución de Orlando Hall fue la primera, desde 1889, que se llevaba a cabo durante un periodo de transición presidencial. [Brendon Bernard](#), que tenía sólo 18 años en el momento de cometerse el delito, fue ejecutado el 10 de diciembre; [Alfred Bourgeois](#), con una discapacidad intelectual, el 11 de diciembre. Las diez ejecuciones tuvieron lugar en el Centro Penitenciario Federal de Terre Haute, Indiana.

Se han presentado al fiscal general Barr peticiones generalizadas para que detenga las ejecuciones; entre las más recientes de esas peticiones se encuentra la realizada por casi [100 fiscales y exfiscales](#), fiscales generales y fiscales generales adjuntos estatales, altos responsables de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, y ex fiscales generales de Estados Unidos y miembros del Departamento de Justicia. En la actualidad, 142 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, por considerarla una violación de la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.



PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 15 de enero de 2021

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas en peligro de ser ejecutadas por la jurisdicción federal estadounidense (masculino y femenino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/3441/2020/es/>

